

LAS PLAYAS DEL MAR Y LA CONSTITUCION

Salvador de la Haza

B.1959.8

(Especial para "El Nacional")

Entre las funestas consecuencias de las tiranías, generalmente se da poca importancia a aquella que consiste en convertir en "derechos adquiridos" a los despojos realizados en bienes y derechos de la Nación y de la colectividad por el tirano y por quienes se beneficiaban de la anormal situación. El correr veles de las cereas sobre tierras baldías, la ocupación de inmuebles, de espacios destinados al uso común de la población, el ilegal otorgamiento de concesiones para la explotación de minerales o de otra índole, son transformados en "títulos" suficientes para "legalizar" usurpaciones y robos descarados. Ese despojo a la Nación suscita cuando una acción por enriquecimiento ilícito, pero a la Nación no se le retribuye lo hurtado; el beneficiado o concesionario permanece intocado y hasta el juicio más bien legaliza la ilegal ~~usurpación~~ operación.

La vaguedad en que están expresados en la Constitución y leyes los derechos de la Nación y de la colectividad, la omisión expresa de disposiciones pertinentes de defensa y acción, son asideros en que se apoya la cohorte de "pajares bravos" para consolidar sus delictuosas actuaciones. No es aventurado afirmar que contra la Nación y los intereses de la colectividad se puede atentar impunemente, a tal punto que reivindicar esos derechos atropellados levanta tan encolerizadas pretestas que son pocos los que osan afrontar esas iras. "Sube y baja" político no deja de ejercer influencias persuasivas al respecto. Ejemplo de esta realidad nos la suministra lo que está ocurriendo con motivo de la declaración oficial de la Procuraduría de la Nación en relación a que "las riberas del mar, lagos y ríos navegables hasta el límite señalado por las leyes de la República, son del dominio y uso público. Los afectados por esa declaración han considerado "necesario rechazar tal interpretación hacer del conocimiento de la colectividad" que ocuparen porque eso era de ellos y no se ~~verá~~. Alegan que "no existe en las leyes de Venezuela disposición alguna contraria a la propiedad privada de playas y riberas del mar", que las playas no son del dominio público porque el Código Civil no las enumera entre los bienes del dominio público. Temeraria afirmación a más de irrespetuosa dada la dignidad del funcionario que dictaminó. Sin pretender entrar en materia, queremos recordar a los "abaje suscritos", que el Código Civil, Art.33 enumera entre los bienes del dominio público a los CAMINOS y que precisamente las playas, desde la más remota antigüedad, han tenido por destino ser los caminos naturales por donde han traficado los hombres en su ir y venir para satisfacer la necesidad de comunicarse entre sí, de establecer relaciones sociales, de intercambio, concepto que, por otra parte, consagra el mismo Código Civil al establecer en su Art.645: "Las limitaciones legales de propiedad predial que tienen ^{por} objeto la UTILIDAD PUBLICA, se refieren a la conservación de los bosques, al curso de las aguas, al PASO POR LAS ORILLAS DE LOS RIOS Y CANALES NAVEGABLES, etc..", es decir, que si las orillas de los ríos y canales navegables son reconocidas como CAMINOS de uso público, sobre los cuales no se puede construir ni obstaculizar el paso de hombres, sus animales y vehículos, con mayor razón las orillas del mar tienen que estar comprendidas dentro de ese concepto de utilidad pública. Los linderos de los predios llegados, por tanto, hasta esa faja de la orilla de los ríos, canales, lagos, mares por donde tiene la colectividad derecho de paso, estacionamiento, uso de transportes. La ausencia en las leyes de especificación concreta sobre el ancho de la "orilla", no niega de ninguna manera la existencia de ese derecho, exhibe cuando más una omisión expresamente cometida. L

cierto es que hasta la tiranía de Pérez Jimenes no había sido objetado el uso público de la orilla del mar, y las cercas llegaban a algunos metros del límite de las más altas mareas. La Ley de Tierras Baldías y Ejidos, numeral 2º del Art.13, indirectamente fija un hecho a esa faja: "debiendo en todo caso quedar libre una faja de veinte metros".

Con siglos de anterioridad al Código Civil, existía ya el derecho de las colectividades al paso libre por las orillas de los ríos, lagos, canales navegables, al paso libre por la orilla del mar y en ella desembarcar, hacer reparaciones a sus navíos, extender redes de pesca, etc, por lo que ese derecho no es una "innovación" de Venezuela ni consecuencia de "movimiento sovietizante" -despectiva expresión usada por un leguleyo para calificar la situación post 23 enero 1958-, sino norma en todos los países, incluidos los occidentales. Quien haya viajado por Europa, por ejemplo, se habrá dado cuenta de como los "balnearios" tienen construidas sus instalaciones a determinada distancia del mar y como trafican por las playas y en ellas toman el sol los bañistas con toda libertad. En algunos lugares, mediante arreglos con las Municipalidades y pago de impuestos bastante crecidos por cierto, existen instalaciones para desvestirse y vestirse, a las cuales se tiene acceso pagando una tarifa determinada y controlada por las respectivas autoridades.

Los "leguleyos" con el propósito de "legalizar" las usurpaciones realizadas durante las tiranías, conscientemente confunden, aprovechándose de las deficiencias legales al respecto, el uso público de las orillas del mar, de una determinada faja de las playas, con el uso, también público, de las aguas del mar para en ellas tomar baños, lo que los ha llevado de incluso a propiciar la pretensión de que los linderos de los predios penetren en el mar indefinidamente y en el agua así circunscrita no puedan bañarse, navegar, pescar sino los propietarios de los predios o los miembros de los Clubs en ellos establecidos. Tal ocurre en el llamado "Balneario Cata", cuyos organizadores no se han contentado con cerrar el acceso natural al mar del pueblito vecino del mismo nombre, sino que al mordisco de la orilla han agregado el no menos suculento de un trozo de mar. Los domingos contratan agentes policiales del Municipio de Ocumare de la Costa para que arresten a cuantos bañistas, no miembros del club, traspasen los límites señalados en el mar.

La Sub-Comisión Legal de la Comisión Agraria ^{man}tomando en cuenta el cúmulo de abusos, atropellos, usurpaciones de que es víctima la Nación por parte de particulares que se aprovechan de la ausencia en la Constitución y Leyes, elaboró un Anteproyecto de Reformas a la Constitución que ha sido sometido a la consideración de la Comisión Bicameral de Reformas a la Constitución y del cual hoy nos limitaremos a transcribir el Inciso que consagra, entre otros, el derecho de la Nación sobre las playas del mar:

"INCISO IV: Son propiedad de la Nación y están sujetos a su soberanía el espacio aéreo que cubre su territorio hasta el límite exterior del mar territorial; las aguas, el suelo y el sub-suelo del mar territorial; el lecho y el sub-suelo de la plataforma continental de la República, incluida la de sus islas, y las PLAYAS DEL MAR HASTA 25 METROS CONTADOS DESDE LA MAS ALTA MAREA. La extensión del mar territorial, la zona marítima contigua, las reservas de pesquerías y la plataforma continental se determinarán por la Ley.

" El lecho y las aguas de los lagos y sus riberas hasta una anchura de 15 metros; las aguas de los ríos y las de las quebradas o arroyos que atraviesen o limiten más de una propiedad rural; los lechos de los ríos navegables y sus riberas hasta una anchura de 15 metros, y las caídas de agua aprovechables en la producción de energía, son bienes

"del dominio público cuyo aprovechamiento, vigilancia, conservación y control están a cargo del Ejecutivo Nacional, conforme lo establezca la Ley.

"Cualquier otra corriente de agua no incluida en la enumeración anterior es parte integrante de la propiedad privada donde corra, pero sometida también a las normas de conservación y vigilancia que fije la Ley".

Al dar a conocer este texto, invitamos a cuantos estén de acuerdo con su contenido a manifestarle así a la Comisión Bicameral de Reformas a la Constitución. Solo consagrand en la Constitución estos principios, es que se pondrá coto a los abusos contra la Nación.